

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C, dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022).

Ref. No. 2022-00099.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve el Despacho las objeciones formuladas por el acreedor Edwin Ferley Rojas Ochoa a la relación de acreencias, efectuada por el Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco, dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante de Álvaro Arenas Osorio.

II. ANTECEDENTES

1. El señor Álvaro Arenas Osorio, promovió solicitud de negociación de deudas de persona natural no comerciante, en la cual relacionó varias acreencias, dentro de ellas: **(i)** cuatro de carácter fiscal a favor de la Alcaldía de Villavicencio, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, la Secretaría de Movilidad de Bogotá y Electrificadora del Meta S.A. ESP por la sumas de \$8.862.395, \$1.470.000, \$9.416.300 y \$1.470.000, respectivamente; y **ii)** once acreencias de quinta clase a favor de Edwin Ferley Rojas Ochoa, Banco Davivienda S.A., Banco de Bogotá, Seguros Sura Colombia, Gonzalo Tirado Arenas, Pedro Alonso Penagos, Leila Sofía Barrera Martínez, Cecilia Lorena Díaz Forero, Luis Emgidio Parra Guarín, Giovanni Hernández y Colegio Liceo Andino Villavicencio.

2. El conocimiento des asunto correspondió a la abogada conciliadora en insolvencia Katherine Leonora Santander Santacruz del Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco que, en auto 0001 de fecha 14 de septiembre de 2021, admitió la petición y en consecuencia, ordenó comunicar a todos los acreedores relacionados por la deudora peticionaria y la notificación a las agencias judiciales para prevenirlos sobre la actuación.

3. En audiencia celebrada el 9 de noviembre de 2009 se puso en conocimiento de los acreedores la relación detallada de las acreencias manifestadas en la solicitud y se actualizaron los montos de capital e intereses, así como la clase de crédito de cada uno de ellos.

4. Durante dicha audiencia, el acreedor Edwin Ferley Rojas Ochoa, por conducto de apoderada judicial, formuló objeciones respecto del monto por los conceptos de capital e intereses relacionados en la solicitud respecto de la obligación a su favor, en virtud de lo cual la conciliadora concedió el plazo para que se presentara la debida sustentación y las pruebas a que hubiere lugar.

5. Dentro de la oportunidad el citado acreedor, presentó la sustentación de las objeciones, en la que argumentó que el monto de su acreencia no corresponde a la realidad, toda vez que, la misma se soporta en una letra de cambio por valor de \$310.000.00 y no \$160.000.000 como señaló el deudor en la solicitud de negociación de deudas, amén que no se incluyó suma alguna correspondiente a intereses, pese a que el señor Álvaro Arenas Osorio tenía pleno conocimiento acerca de su causación, pues existe el proceso ejecutivo singular radicado No. 500013153002201800011-00 adelantado ante el Juzgado 2° Civil de del Circuito de Villavicencio que culminó mediante sentencia de fecha 26 de abril de 2019 y en proveído adiado 10 de junio de esa misma anualidad se aprobó una liquidación del crédito en la suma de \$485.975.944,44 de los cuales \$175.974.944,44 corresponden a intereses moratorios y adicionalmente se aprobó la liquidación de costas en \$9.347.400.

En razón a lo anterior considera que su acreencia debe ser tasada en **\$812.232.212.77** que incluye una actualización de la liquidación del crédito que fue presentada a la sede judicial en mención, el valor de las costas procesales y la suma de \$136.929.935 por los honorarios profesionales de su apoderada judicial.

De otro lado, señaló que no se deben tener en cuenta las obligaciones constituidas a favor Gonzalo Tirado Arenas, Pedro Alonso Penagos, Leila Sofia Barrera Martínez, Cecilia Lorena Díaz Forero, Luis Emigdio Parra Guarín, y Giovanni Hernández, en tanto que, no existe soporte legal que permita verificar su existencia sin que baste la mera manifestación del deudor, máxime cuando resulta sospechoso que el deudor supuestamente se encuentra en mora por más de 90 días sin que sus acreedores hayan iniciado ninguna acción legal a fin de recaudar la deuda y no concurrieron a las audiencias celebradas en el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante cursado ante el Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco. De manera que, se trata de un montaje para darle manejo a la mayoría decisoria.

Finalmente, manifestó frente al contenido de la solicitud de negociación de deudas que aun cuando el señor Álvaro Arenas Osorio declaró, bajo la gravedad de juramento, que toda la información que suministra es verdadera sin incurrir en omisiones, imprecisiones o errores voluntarios que impidan conocer su verdadera situación económica y capacidad de pago no se trata de una manifestación seria, puesto que no indicó de forma detallada su estado civil y las

obligaciones alimentarias a su cargo, además no presentó una propuesta de pago clara, expresa y objetiva en los términos del artículo 539 del Código General del Proceso, por el contrario, la presentada resulta irrisoria y simbólica convirtiéndose en una burla para los acreedores que va en contravía de los principios de la buena fe y lealtad procesal.

4. La deudora Nancy Bernal Marín en su oportunidad, se opuso a la prosperidad de las objeciones planteadas para lo cual adujo que en la solicitud se relacionó la deuda a favor de Edwin Ferley Rojas Ochoa en \$160.000.000 habida cuenta que se realizaron los siguientes pagos: a) \$40.000.000 del 23 de noviembre de 2017, b) \$70.000.000 del 21 de septiembre, c) \$35.000.000 de 8 de octubre de 2017, d) \$5.000.000 del 19 agosto de 2017, e) \$4.000.000 y f) \$4.000.000 del 30 de agosto de 2017 para un total de \$158.000.000.

Informó que dichos pagos fueron efectuados de confianza a la madre del objetante, la señora Paola Ochoa Oviedo, sin embargo, en el trámite de negociación de deudas el acreedor pretende desconocer esta circunstancia, actuando de mala fe y queriendo hacer incurrir en error a la administración de justicia, además, no se puede tener en cuenta la actualización del crédito, toda vez que, el único facultado para aprobarla es el Juez que conoce el proceso ejecutivo y tampoco habría lugar a fijar suma alguna por concepto de honorarios.

Sumado a lo ya expuesto, adujo que los demás reparos a que hace referencia la parte objetante son extemporáneos puesto que los únicos argumentos en los cuales se basó la audiencia versaron sobre la cuantía del capital de la obligación quirografaria en mención, pese a ello, manifestó que si no cuenta con los soportes de las obligaciones a favor de Gonzalo Tirado Arenas, Pedro Alonso Penagos, Leila Sofía Barrera Martínez, Cecilia Lorena Díaz Forero, Luis Emigdio Parra Guarín y Giovanny Hernández, no es un impedimento para poder acogerse al trámite de insolvencia ya que sus declaraciones las realiza bajo la gravedad de juramento la información suministrada respecto de la existencia de sociedad conyugal.

Frente a la propuesta de pago aclaró que si ésta no satisface los intereses del acreedor no implica que no sea clara, expresa y objetiva debiendo limitarse el objetante a emitir un voto negativo, sin que pueda calificarse de fraude procesal.

III. CONSIDERACIONES

1. Dentro del amplio abanico de posibilidades con que el deudor cuenta para honrar sus obligaciones frente a sus acreedores producto de una crisis por el sobreendeudamiento u otros factores, el Legislador creó un nuevo régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes, que tiene como punto de

partida el procedimiento de negociación de deudas, luego, la convalidación del acuerdo privado y la liquidación patrimonial.

Ubicados en el primer escenario, cumple anotar desde el umbral que se trata de una serie de procedimientos en virtud de los cuales intervienen el deudor y sus acreedores, en cuya primera fase está encaminada a buscar alternativas efectivas de solución de las obligaciones vencidas a través de distintas fórmulas de arreglo que permitan llegar a la normalidad crediticia.

En ese sentido, la proposición debe ser clara, expresa y objetiva, es decir, acorde con su estado patrimonial y el de los convocados; en otros términos, equilibrada, razonable, proporcional, posible de cumplir en procura de buscar la satisfacción e igualdad de los acreedores sin desconocer los lindes de privilegio que detentan algunas acreencias.

Ahora, la articulación atañedora a este trámite es estricta al señalar que las relaciones o listados de acreedores, activos, procesos judiciales, certificaciones, en fin, toda clase de información que es de su esencia, deben ser fieles a la realidad, completos, detallados y sobre todo actualizados *“con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud” (parágrafo 2º art. 539 CGP)*.

Así, pues, cuando la solicitud incumple tales exigencias, es imperativo para el funcionario concursal, inadmitirla señalando sus defectos para que sean enmendados por el interesado, de no ser acatado, se procederá a su rechazo. En caso contrario y una vez sufragadas las expensas, le imprimirá el trámite de rigor como lo señala la normatividad –artículos 542 y siguientes- que supone una serie de efectos a partir de la aceptación –artículo 545-.

2. Precisamente, una fase introductoria se gesta en la audiencia de negociación de deudas *“que constituirá el nudo principal del procedimiento”* ¹, previa citación en legal forma de todos los acreedores que impone, en rigor, que tales actos de intimación se surtan con total transparencia permitiendo así el conocimiento real y efectivo para que el desenvolvimiento no se lleve a cabo a sus espaldas con violación de sus derechos superiores que ello acarrearía.

Esta audiencia constituye un acto de vital importancia *“la médula del procedimiento de negociación de deudas”* que busca sentar al deudor y sus acreedores a discutir la solución de la crisis. Una primera fase comprende el debate sobre los créditos incorporados por el deudor con miras a que ejerzan sus derechos de

¹ Pájaro Moreno, Nicolás. REGIMEN DE INSOLVENCIA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE. ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LOS PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE. <https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/16nicolas-pajaro-moreno.pdf>

contradicción. En la segunda parte, se discutirá sobre la propuesta del deudor y se someterá a votación.

Dice la norma que el conciliador pondrá en conocimiento de los acreedores la **“relación detallada”** de las acreencias y les preguntará si están de acuerdo con la existencia, naturaleza y cuantía. En caso de disenso –objeciones – deberá procurar conciliarlas a través de distintas fórmulas de arreglo que, de declararse fracasada, procederá conforme los artículos 551 y 552 ibídem. El operador debe suspender la audiencia por el término de 10 días, para que, dentro de los cinco (5) primeros días, los inconformes presenten las objeciones por escrito junto con las pruebas que pretendan hacer valer. Otro término igual, correrá para los demás acreedores y deudor para que se pronuncien y aporten pruebas.

En ese norte, la intervención del Juez Civil Municipal se circunscribe, en una primera etapa, a la resolución de las objeciones, tal como lo prevé el artículo 552 de la Ley 1564 de 2012.

3. Trazado el anterior marco legal, se advierte que en el presente asunto corresponde a esta autoridad judicial resolver de plano sobre las posibles irregularidades presentadas en el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante de Álvaro Arenas Osorio ante el Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco.

Como fundamento de las objeciones el acreedor Edwin Ferley Rojas Ochoa, presentó tres argumentos centrales, a saber: **(i)** la solicitud de negociación de deudas presentada por la deudora no comprendía la totalidad de los requisitos legales en punto de la propuesta de pago y la declaración sobre la existencia de sociedad conyugal vigente y obligaciones alimentarias, **(ii)** existen inconsistencias en las obligaciones de que son titulares Gonzalo Tirado Arenas, Pedro Alonso Penagos, Leila Sofía Barrera Martínez, Cecilia Lorena Díaz Forero, Luis Emigdio Parra Guarín, y Giovanni Hernández que ponen en duda la veracidad de las mismas y **(iii)** en su acreencia el valor relacionado por concepto de capital e intereses moratorios asciende a un monto mayor.

i) En cuanto al contenido de la solicitud de negociación de deudas y las obligaciones a favor de las personas naturales antes citadas.

1. Frente a tales reparos, se itera que en asuntos de esta naturaleza es menester que el deudor presente una solicitud de trámite de negociación de deudas atendiendo todos y cada uno de los requisitos dispuestos en el artículo 539 del Código General del Proceso, entre estos, debe incluir un listado de los bienes, una relación completa y actualizada de todos los créditos señalando la cuantía de cada uno de ellos y diferenciando capital e intereses, la naturaleza de

los mismos, la tasa de interés aplicada y demás circunstancias que resultan de carácter relevante en caso de no contar con toda la información deberá manifestarlo de forma expresa, siendo así, es deber del conciliador designado o en su defecto del notario previo a la admisión comprobar el cumplimiento de tales exigencias.

A su vez el parágrafo primero del precitado canon preceptúa que: *“La información de la solicitud del trámite de negociación de deudas y las declaraciones hechas por el deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, **se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y en la solicitud deberá incluirse expresamente la manifestación de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación económica y su capacidad de pago**”.*

De lo anterior se desprende que las manifestaciones efectuadas por el deudor gozan de plena validez en la medida que se entienden rendidas bajo la gravedad de juramento de ahí que la información suministrada se presuma cierta, pues de otro modo supondría vulnerar el principio de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política. Al respecto el máximo tribunal en materia constitucional precisó:

*“La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero **dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.**”²(énfasis fuera de texto)*

Bajo esta perspectiva sobre el requisito de la relación completa y actualizada de todos los créditos y acreedores, la doctrina ha dicho que se fundamenta en la prerrogativa antes citada así: *“Este requisito es desarrollo de los principios de colectividad e igualdad. En efecto, el deudor debe relacionar todos y cada uno de sus acreedores, **relación que de una parte es expresión del principio de buena fe y comporta por tanto el reconocimiento de la existencia y cuantía de cada una de las obligaciones que se reclaman.**”³*

2. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la audiencia de negociación de deudas, cabe aclarar que la relación detallada de las acreencias debe ponerse en conocimiento de los acreedores citados a fin de que manifiesten sus inconformidades respecto de la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones, evento en el cual el conciliador designado se encuentra en el deber

² Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.

³ Juan José Rodríguez Espitia (2015), Régimen de Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante, Universidad Externado de Colombia.

de proponer fórmulas de arreglo procurando que se sometan a discusión y de ser el caso sean conciliadas en la misma audiencia, en ese sentido, si no se logra llegar a un acuerdo, como se adujo en líneas procedentes, se concede un término 5 días a los objetantes para la sustentación por escrito y la remisión de los documentos correspondientes a la autoridad judicial.

De manera que, es la referida diligencia el momento procesal oportuno para formular objeciones en punto de la relación de créditos denunciados por el deudor para que sean debatidas al interior de la audiencia, sólo ante la imposibilidad de lograr un acuerdo se abre paso la intervención judicial y si bien el legislador determinó que éstas se deben sustentar por escrito, de manera alguna puede entenderse como una oportunidad adicional para incluir argumentos distintos a los previamente exteriorizados.

3. Bajo esta perspectiva, descendiendo al caso puesto a consideración del Despacho, de entrada se advierte la improsperidad las objeciones presentadas por Edwin Ferley Rojas Ochoa con relación al contenido de la solicitud inicial de negociación de deudas y los créditos constituidos a favor Gonzalo Tirado Arenas, Pedro Alonso Penagos, Leila Sofia Barrera Martínez, Cecilia Lorena Díaz Forero, Luis Emigdio Parra Guarín, y Giovanny Hernández por haber sido formuladas de forma extemporánea.

En efecto, en atención a los medios de convicción obrantes al interior del plenario, en particular, la comunicación emitida por Katherine Leonora Santander Santacruz, en su calidad de abogada conciliadora, mediante la cual realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el trámite de insolvencia de persona natural del señor Álvaro Arenas Osorio, así como, las actas de las audiencias llevadas a cabo el 11 de octubre, 26 de octubre y 9 de noviembre del año 2021 se observa que las inconformidades del objetante que se sometieron a discusión en la diligencia se ciñeron única y exclusivamente a la cuantía de su obligación sin hacer referencia alguna a las circunstancias que ahora se debaten, por tanto, no podría esta Juzgadora resolver dichos reparos habida cuenta que constituyen aspectos nuevos respecto de los cuales no se intentó su conciliación en el procedimiento de negociación conforme lo prevé el artículo 550 de la normatividad en cita.

3.1. Al margen de lo anterior, no se puede perder de vista que la competencia del Juez Civil Municipal, en esta clase de asuntos se limita a resolver acerca de los reparos propuestos frente a la relación de acreencias presentada en la audiencia de negociación de deudas, en la que sólo se pueden formular objeciones de cara la existencia, naturaleza y cuantía de las mismas, sin que sea posible en esa etapa del proceso verificar los requisitos legales que debe contener la solicitud presentada por el deudor.

Lo anterior, porque en los términos del artículo 533 del estatuto procesal, dicha tarea está asignada al Centro de Conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia o la Notaria del lugar del domicilio del deudor, quienes tienen el deber de constatar que se cumplan a cabalidad los presupuestos legales para la admisibilidad del trámite de insolvencia. De manera que, no tampoco es posible revisar dichos presupuestos, pues la competencia de la jurisdicción está restringida a resolver sobre las objeciones, tal como lo prevé el artículo 552 de la Ley 1564 de 2012, de suerte que cualquier tipo de circunstancia en dicho sentido, no es posible resolverla en esta oportunidad.

3.2. Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que es dable emitir un pronunciamiento de fondo, cumple precisar que, en todo caso, la parte objetante dejó huérfano el debate probatorio, pues no allegó ningún medio de prueba que permita acreditar su dicho, esto es, que las obligaciones en cabeza Gonzalo Tirado Arenas, Pedro Alonso Penagos, Leila Sofía Barrera Martínez, Cecilia Lorena Díaz Forero, Luis Emigdio Parra Guarín, y Giovanny Hernández, no corresponden a la realidad y constituyen acreencias ficticias, ora que la información relativa al estado civil del deudor es falsa, quedando sus afirmaciones en el mero enunciado.

Es que, conforme las normas, jurisprudencia y doctrina citada en párrafos precedentes, en el procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante basta con la sola declaración del deudor para presumir por cierta la información suministrada con relación a los bienes, ingresos y, créditos, incluso las normas que regulan la materia faculta al deudor para que en el evento en que desconozca ciertas circunstancias frente a las obligaciones por él adquiridas lo manifieste, pues de lo contrario conllevaría a la transgresión del principio de buena fe que se presume concurre en todas las actuaciones administrativas y judiciales, razón por la que resultaría desacertado solicitar que de carácter imperativo al momento de acudir al procedimiento de insolvencia se aporten soportes de las acreencias.

Por consiguiente, de existir alguna irregularidad en el contenido de la solicitud de negociación de deudas, de acuerdo a la carga de la prueba plasmada el artículo 167 del Código General del Proceso según el cual *“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*, correspondía a la parte objetante demostrar que el señor Álvaro Arenas Osorio actuando de mala fe realizó afirmaciones temerarias acerca de su estado financiero, máxime cuando se hizo referencia a una intención de alterar los porcentajes de votación para efectos del acuerdo de pago, pues no es posible exponer argumentos de tal talante sin siquiera aportar prueba alguna.

ii) Frente a la obligación en cabeza de Edwin Ferley Rojas Ochoa.

1. A propósito de la objeción impetrada, se advierte que la misma se sustenta en que el valor denunciado por el deudor en la solicitud de negociación de deudas por concepto de capital e intereses (\$160.000.000) a favor del acreedor Edwin Ferley Rojas Ochoa, no corresponde a la realidad, pues, el monto total de la deuda en verdad asciende a la suma de \$812.232.212.77.

De la prueba documental aportada se desprende que el acreedor en comento formuló demanda ejecutiva singular de mayor cuantía en contra del deudor Álvaro Arenas Osorio a fin de obtener el pago de la suma de \$310.000.000 por el capital contenido en la letra de cambio No. 001 suscrita el 9 de agosto de 2017, cuyo conocimiento correspondió por reparto al Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de la ciudad de Villavicencio bajo el radicado No. 2018-00011, que mediante auto de 24 de enero de 2018 libró mandamiento de pago, el demandado se notificó en debida forma y como quiera que no ejerció ningún tipo de oposición a la orden de apremio dentro del término legal correspondiente en proveído calendado 26 de abril de 2019 se dictó auto de seguir adelante la ejecución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 440 del Código General del Proceso y finalmente, en proveídos del 18 de junio y 17 de julio de 2019, se aprobó la liquidación de costas y la liquidación del crédito presentada por la parte actora en las sumas de \$9.347.400 y \$485.974.944,44 respectivamente para un total de **\$495.322.344.**

Bajo esta tesitura, se observa que en efecto se incurrió en un yerro respecto de la obligación de que es titular el aquí objetante, toda vez que, en la relación de acreencias presentada en el trámite concursal se tuvo en cuenta un valor bastante inferior al realmente adeudado y respecto del cual existe una providencia judicial que se encuentra debidamente ejecutoriada, por tanto, comporta plena validez probatoria.

Es que, aun cuando el deudor manifestó que con anterioridad a la admisión del procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante realizó unos pagos consistentes en: a) \$40.000.000 del 23 de noviembre de 2017, b) \$70.000.000 del 21 de septiembre, c) \$35.000.000 de 8 de octubre de 2017, d) \$5.000.000 del 19 agosto de 2017, e) \$4.000.000 y f) \$4.000.000 del 30 de agosto de 2017 para un total de \$158.000.000, aportando para sustentar su dicho unos recibos de caja menor y una constancia de las transacciones efectuadas a nombre de la señora Paola Ochoa, quien indicó es la madre del acreedor Edwin Ferley Rojas Ochoa, lo cierto es que, dichos pagos no pueden ser tenidos en cuenta en esta oportunidad, toda vez que, si el deudor considera que se presentaba un hecho que indubitadamente producía la extinción parcial o total de la prestación a su cargo debía alegarse como excepción al interior del proceso ejecutivo adelantado en su contra, sin que pueda acudir ahora al trámite concursal como una instancia adicional con el propósito de que sean debatidos argumentos que

tenían que exponerse ante el juez natural en el escenario procesal correspondiente, tratándose entonces, de una discusión ya zanjada.

Ahora bien, cabe resaltar que, aunque se encuentre demostrado en el informativo que la acreencia del objetante deberá ser modificada por corresponder a un monto mayor el relacionado en la solicitud inicial, de modo alguno puede calificarse en \$812.232.212.77 como equivocadamente adujo el acreedor en el escrito mediante el cual se sustentaron las objeciones, pues, no obra en el plenario ningún instrumento de convencimiento que permita colegir que en dentro del proceso ejecutivo 2018-00018, con posterioridad al 17 de julio de 2019, se haya aprobado una actualización de la liquidación del crédito o una adicional a la ya referida que contenga el monto de los honorarios a que supuestamente tiene derecho la apoderada judicial del señor Edwin Ferley Rojas Ochoa.

De manera que el valor total de la obligación que acá se debate deberá limitarse al monto que ascienden la liquidación de crédito y costas aprobada por el Segundo (2º) Civil del Circuito de Villavicencio, sin incluir ningún rubro adicional.

En ese orden de ideas habrán de declararse parcialmente fundadas las objeciones formuladas en el trámite de la referencia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE FUNDADAS las objeciones impetradas por Edwin Ferley Rojas Ochoa dentro del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante solicitado por Álvaro Arenas Osorio respecto de la clasificación y graduación de su crédito.

SEGUNDO: ORDENAR al operador de insolvencia designado que adecúe la relación de acreencias incluyendo a favor de Edwin Ferley Rojas Ochoa la suma total de \$495.322.344 por el monto total de su obligación.

TERCERO: DECLARAR INFUNDADAS las demás objeciones formuladas por Edwin Ferley Rojas Ochoa dentro del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante solicitado por Álvaro Arenas Osorio.

CUARTO: ADVERTIR a las partes que contra esta decisión no procede recurso alguno por expresa remisión, parte final del inciso 1° del artículo 552 del Código General del Proceso.

QUINTO: CONDENAR en costas a la parte objetada para lo cual téngase en cuenta como agencias en derecho la suma de \$300.000.

CUARTO: REMITIR por secretaría de INMEDIATO al Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco las presentes diligencias para lo de su competencia. Déjense las constancias del caso. Oficiese.

Notifíquese,

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ**

Firmado Por:

**Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 019
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e4240929da70c2e7137956c73b43e5726ff2334a51759af6024556ca48135876**

Documento generado en 16/05/2022 01:46:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>